
LA POLEMICA SOBRE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE VEJEZ: DEMOGRAFIA Y ECONOMIA POLITICA *VERSUS* SOCIOLOGIA DE LA ANCIANIDAD

Gabriel Cárceles Breis

Universidad de Murcia

INTRODUCCION

Pocos temas han merecido, a través de los tiempos, tan intensa atención de los gobernantes, investigadores, planificadores y estudiosos como ha sido, y sigue siendo, el caso del declive de la natalidad y del alargamiento de la esperanza de vida, resultante, esta última, del cambio en las pautas de mortalidad y determinantes, ambas, junto a los saldos migratorios, de la estructura demográfica de las poblaciones que, a su vez, configuran el funcionamiento, las exigencias y los modos de vida de nuestras sociedades. Este es el caso, en la actualidad, del proceso acelerado de envejecimiento de la población, particularmente notable en los países industrializados. Las consecuencias y «problemas» son objeto de una extensa y rica bibliografía y de un flujo continuo de trabajos técnicos que tienden a interpretar las expectativas de envejecimiento de la población en términos de presión sobre el gasto público, en especial en atenciones sanitarias y pensiones. Veremos más adelante que, pese a la alta calidad científica de algunos trabajos, existe una serie de constantes en todos ellos que, hasta cierto punto, merma el valor de sus conclusiones.

La primera es la incertidumbre a plazos medio y largo. Los parámetros utilizados en los escenarios futuros (J. Bengoechea y J. M. Errasti, 1994; La Caixa, 1996, y Fundación BBV, 1996), y sobre todo sus combinaciones, incluyen fatalmente una carga de especulación que reposan, casi exclusivamente, en

hipótesis «negativas» no sólo en cuanto a fecundidad, sino igualmente en relación con el empleo y la renta.

Otra constante es la aceptación de una situación que, de hecho, no existe: la importancia comparativa de los gastos sociales de España en porcentaje del PIB, cuando, en realidad, seguimos por debajo de la media de la Unión Europea en más de 6 puntos, de 3 de Italia, 5 del Reino Unido y más de 7 de Francia (OECD, 1996).

Pero, indudablemente, el ser o no ser de la trama no es otro que el «trilema»: ¿público, privado o ambos?

En muchos aspectos, el debate actual se asemeja al suscitado por el informe del Massachuset Institute of Technology sobre los límites del crecimiento, a principios de los setenta, y del consiguiente intercambio suscitado por los provocadores estudios generados por la polémica del Club de Roma (D. Meadows, 1972). La carga ideológica es, naturalmente, muy importante y en la misma línea clásica de la secular controversia sobre la natalidad, que invierte los juicios según se trate del Sur o del Norte de nuestro planeta, promoviendo, respectivamente, la planificación familiar acelerada o el incremento de la fecundidad a todo precio en los unos y en los otros.

Al catastrofismo reinante respecto a la sobrepoblación del Sur corresponde el de la despoblación del Norte, con sus secuelas de envejecimiento y las consecuencias en términos de prestaciones sociales: atenciones sanitarias y pensiones. La literatura sobre la disyuntiva es excepcionalmente extensa y, en general, categórica, dando lugar a puntos de vista realistas y razonables, en unos casos, y bastante menos, en otros (M.^a T. Bazo, 1990 y 1993; A. Cabré, 1993; A. Collado, 1993, y P. Sánchez Vera, 1993).

La controversia sobre el envejecimiento de la población en los países del Norte enfrenta posiciones y disciplinas —concretamente a la Economía política y a la Sociología— con sólidos argumentos alternativos, al menos parcialmente axiomáticos, a veces basados en supuestos o hipótesis de trabajo más o menos documentados con sus correspondientes escenarios y alternativas, que a menudo minimizan la imprecisión evidente sobre el comportamiento reproductivo del futuro, difícilmente previsible si nos basamos en las fluctuaciones del pasado. Esto es tanto más cierto en cuanto los escenarios, estrictamente demoeconómicos, dejan fuera de sus formulaciones factores determinantes de talla, tales como la evolución potencial de la productividad, de la distribución de la actividad y de la renta, sin contar con las mutaciones sociales previsibles al implementarse definitivamente los acuerdos de la Unión Europea. De hecho, los ejercicios en cuestión están basados en escenarios macroeconómicos (PIB real, empleo, productividad, salarios reales, inflación, paro, etc.) problemáticos aunque técnicamente respetables, como lo fueron los utilizados por la OECD en los modelos econométricos de los sesenta (J. Tinbergen, 1965). Cuya capacidad de predicción fue muy limitada.

Las interrogantes que en todo caso resultan conducen a alternativas en las que, naturalmente, los factores técnicos se limitan a opciones o prioridades

cuya adecuación es exclusivamente función del medio o largo plazo. Estos procedimientos, en teoría correctos, podrían causar alarma al no resaltar su carácter estrictamente condicional y, particularmente, al extrapolar coeficientes y *ratios* a largo plazo, mostrando, por ejemplo, la supuesta inviabilidad de los sistemas de pensiones, cuyos gastos en porcentaje del PIB dependerán, naturalmente, de factores diversos, entre los cuales: *a)* la dimensión real del número de beneficiarios; *b)* los niveles medios y totales de gastos, y *c)* la importancia efectiva del PIB generado, función del avance técnico, de la productividad y, en definitiva, del nivel de progreso del país.

O sea, tres incógnitas de envergadura relativamente independientes entre sí. Sin contar con factores de peso como el futuro de la integración europea, que debería resolver una serie de problemas al suponerse que España se integra en un sistema socialmente más favorable a los mayores (pensiones actuales muy superiores, mejores condiciones generales). Es preciso, por tanto, resaltar el carácter especulativo de cualquier proyección cuyo objetivo es simplemente mostrar «qué puede ocurrir si...», cuando tantos parámetros dependen de factores exógenos.

Parece razonable aceptar que el problema no es técnico, sino de voluntad política (A. Zabalza, 1994), toda vez que el modelo de sociedad democrática occidental está basado en la solidaridad intergeneracional y en la función equilibradora del Estado. Las alternativas posibles, sin atreverse a confesarlo en la mayoría de los casos, muestran preocupación por la carga social resultante del alargamiento del ciclo de vida real y la reducción del laboral. La alternativa minimalista parece ser el sistema de capitalización, el «sistema chileno», en el que los futuros beneficiarios realizan una aportación mensual obligatoria, alrededor del 10 por 100 de sus salarios, que son administrados por entidades privadas de fondos de pensiones.

Todo ello, por tanto, merece ser considerado con cautela ante la evidencia histórica de cambios radicales de tendencias tanto económicas como demográficas (como fue el caso después de la crisis de los años treinta), susceptibles de replantear los problemas presentes sobre la base de mutaciones de hecho, en plazos relativamente cortos y a sabiendas también de que la capacidad de intervención central es muy limitada, incluso en casos de control muy severo (China), lo cual sugiere estrategias globales y flexibles que acepten, sin reservas, tanto los elevados niveles probables de incertidumbre como los límites del voluntarismo.

Voces muy cualificadas (M. Rocard, 1996) formulan actualmente propuestas concretas a la Unión Europea en el sentido de reducir masivamente la jornada laboral, cambiando la financiación del paro a la del empleo, afectándose parte de tales fondos a la reducción de la duración del trabajo. Y señalando, concretamente, no sólo qué hacer sino, además, cómo. He aquí una de las vías, junto a la prolongación de la vida activa, para cambiar de signo las previsiones de déficits que mantienen constantes, o con ligeros cambios, las tasas de actividad y, por ende, las cotizaciones. La referencia a Keynes, que ya en 1930 preveía que, antes de fin de siglo, bastaría trabajar tres horas por día o tres días

por semana para satisfacer las necesidades de la humanidad, no ignora el proceso actual de mundialización ni el hecho de que debemos competir con países que producen bienes de calidad más que aceptable, con costes laborales inferiores al 10 por 100 de los nuestros y sin protección social alguna.

Es cierto que gran parte de la confusión existente resulta, frecuentemente, de una interpretación inadecuada de los indicadores demográficos que se limitan a cuantificar tendencias y a proyectar sus índices en base a ciertas hipótesis de trabajo. Un error frecuente consiste en considerar las brechas entre proyecciones y resultados observados como «errores», cuando de hecho éstas indican que algunas o todas las hipótesis de trabajo sobre la evolución de los componentes del cambio demográfico no se han verificado. Por lo que respecta al cambio de los factores determinantes del crecimiento y de la estructura de las poblaciones (es decir, natalidad, mortalidad y migraciones), la incertidumbre a medio y, sobre todo, largo plazo está sometida a márgenes de error muy considerables. No es menos frecuente el error que consiste en considerar el resultado de las proyecciones como el porvenir «probable» en lugar de «posible», al olvidar que proyectar no es en modo alguno prever.

Un ejemplo de tales «errores» es la proyección realizada por la División de Población de la ONU en 1951, según la cual la hipótesis media (o la más plausible) para 1980 daba una población mundial total de 3.300 millones. Dicha cifra fue alcanzada en 1965 (o sea, en catorce años, en lugar de los veintinueve proyectados, un error de más de la mitad del horizonte previsto). En realidad, en 1980 la población mundial totalizó 4,444 millones, o sea, superior en más de un tercio (1,144 millones de personas) al total proyectado.

Las «revisiones» de estimaciones y proyecciones son muy corrientes y se basan, en general, en los datos y tendencias más recientes, por lo que son generalmente considerados como de mejor calidad. Este ha sido el caso de los datos utilizados para España, en que la última revisión de la ONU hasta el año 2050 (ONU, 1995) coincide cronológicamente con la del Instituto de Demografía del CSIC, hasta 2026 (1994). Las divergencias existentes, a las que aludiremos brevemente más adelante, se explican por el hecho de que las proyecciones de la ONU están basadas en estimaciones anteriores a la del Instituto de Demografía del CSIC, que son, naturalmente, más adecuadas. Las de la ONU, sin embargo, presentan como ventaja un horizonte superior en veinticuatro años (2050), con toda la carga de especulación, pero que justifica su utilización con todas las reservas, a título indicativo y a sabiendas de los márgenes de error, probablemente elevados.

Comparando, por ejemplo, la proyección a medio plazo (al año 2010, último disponible en el trabajo del INSERSO) del grupo de mayores de 65 años, aparece que los resultados de la ONU son superiores en 8 por 100 a los del INSERSO y los del CSIC en 16 por 100, o un millón más de mayores, como se indica en el cuadro 1. Es evidente que desviaciones de este orden plantean problemas en vista de la pretensión de cálculos ajustados, menos fiables cuanto más lejos se sitúa el horizonte elegido.

CUADRO 1

Proyecciones alternativas al año 2010 (65+)
(H. media)

<i>Origen</i>	<i>Fecha</i>	<i>Población</i>
1. Best Line - INSERSO	1991	6.193.570
2. Instituto de Demografía	1994	7.208.580
3. ONU	1995	6.700.000

- FUENTES: 1. *La tercera edad en España: aspectos cuantitativos*, INSERSO, 1991.
 2. *Proyección de la población española*, Instituto de Demografía, CSIC, 1994.
 3. *World Population Prospects: The 1994 Revision*, ONU, NY, 1995.

Nunca enfatizaremos suficientemente el carácter condicional y provisional de todo resultado. A veces, el fin de una proyección es identificar y alertar sobre problemas futuros en vista de adoptar medidas para paliar ciertos inconvenientes.

Es evidente que cuantificar las consecuencias futuras de determinadas tendencias (proyectar) permite la formulación de políticas dirigidas a contrarrestar ciertas corrientes cuyos resultados, en opinión de los responsables de la formulación de las políticas adecuadas, sean contrarios a los objetivos deseados. En el caso de dos de los tres componentes del cambio demográfico (natalidad y migraciones), de hecho en cuestión, determinadas medidas para fomentar su aumento o su restricción han demostrado su eficacia relativa, altamente relacionada con los niveles de desarrollo socioeconómico y, en particular, de instrucción y expectativas de actividad. En cuanto a la mortalidad, los progresos de sanidad y nutrición han disminuido sensiblemente los niveles existentes, limitando a ciertas enfermedades «de ricos» las causas principales de mortalidad de los mayores: enfermedades del aparato circulatorio, tumores, aparato respiratorio y digestivo. Quedan lejos, afortunadamente, las enfermedades infecciosas y parasitarias.

Nos encontramos, de hecho, ante varios debates de actualidad, candentes e *interrelacionados*, centrados sobre el envejecimiento de las poblaciones de los países industrializados y sus consecuencias, que trataremos de resumir, centrándonos en lo posible en el caso español.

En primer lugar, es imposible intentar un diagnóstico de conjunto sin recurrir a la Demografía, incluso muy brevemente y siempre con las reservas señaladas anteriormente. Segundo, el enfoque de la Economía, en base a las perspectivas demográficas, centra el debate en torno a los límites del Estado del Bienestar. Por último, desde la Sociología de la Ancianidad es interesante resumir el estado actual de la polémica entre «optimistas» y «pesimistas».

1. LA DEMOGRAFIA COMO VARIABLE DEPENDIENTE O INDEPENDIENTE DEL DESARROLLO SOCIOECONOMICO

En primer lugar, señalar que mientras que los factores determinantes del crecimiento demográfico son directamente *interdependientes entre sí* antes de alcanzar la *transición demográfica*, devienen prácticamente *independientes* una vez alcanzada ésta. Es evidente que la mutación del régimen antiguo de «equilibrio» alto (fecundidad y mortalidad elevadas) al moderno de «equilibrio» bajo (fecundidad y mortalidad bajas) revoluciona el comportamiento reproductivo al reducir tajantemente la maternidad no deseada, modificar las pautas de nupcialidad, las condiciones y composición de los hogares y familias y, por ende, los demás exponentes del paso de estilos de vida tradicionales a los catalogados como modernos (G. Cárcelos, 1994, 1995).

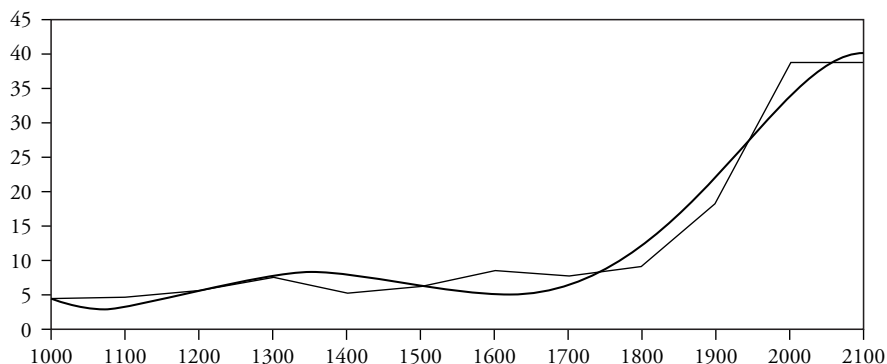
Es obvio que, en la *etapa de pretransición demográfica*, los niveles de mortalidad altos (sobre todo la infantil) determinan una natalidad superior para compensar aquélla. Al mismo tiempo, los altos niveles de fecundidad determinan tasas de mortalidad elevadas (de madres con motivo de los partos, alta mortalidad infantil y juvenil debida a problemas sanitarios, de higiene y nutrición y de entorno, principalmente). Claramente, el proceso de modernización y los modos de vida que implica reducen y retardan tanto la nupcialidad como la natalidad, por una parte, y logran disminuir la mortalidad general, aumentando progresivamente la esperanza de vida.

Podemos, pues, afirmar que las variables demográficas son dependientes del desarrollo socioeconómico y político, como demuestran trabajos empíricos sobre este tema (Organski *et al.*, 1984), aunque se reconozcan igualmente factores culturales y psicológicos como determinantes, sobre todo, de la natalidad.

Sin el declive de la fecundidad que nos sitúa en 1996 con un índice sintético inferior a 1,3 niños por mujer en edad de procrear —o sea, muy por debajo del índice mínimo de reemplazo de 2,1, es decir, el más bajo del mundo, junto con Italia—, la caída de la mortalidad nos hubiera llevado en 2000 a una población de entre 42 y 46 millones, según las variantes (ONU, 1977), en lugar de los 39 estimados en base a los datos actuales. El ritmo de crecimiento resultante, a largo plazo, da resultados muy elevados, como es el caso para la mayoría de los países en desarrollo, con alta natalidad y mortalidad y baja esperanza de vida.

Independientemente de los inconvenientes que pueda presentar la estructura por edades generada por la caída de la fecundidad, es evidente que un crecimiento continuo de la población, en la coyuntura actual, plantea problemas muy serios (alojamiento y empleo, en primer lugar). Es interesante considerar las tendencias de crecimiento de la población española desde el año 1000 hasta las proyecciones de 2050, presentadas en el gráfico 1, y que nos sugieren los efectos de una continuación hipotética de la curva, sin la inflexión que tuvo lugar en los años ochenta, siguiendo en ello las pautas de los demás países

GRAFICO 1

Evolución de la población española, 1000-2050

FUENTES: Elaboración propia en base a datos de: a) *Series históricas*, C. MCEVEDY y R. JONES, *Atlas of World Population History*, Penguin Books Ltd., New York, 1980, y b) *Proyecciones*, *World Population Prospects: The 1994 Revision*, ONU, New York, 1995.

industrializados. El problema del *optimum* de población (W. Petersen, 1965, y L. Singer, 1971), centro del debate demoeconómico del siglo XIX, resulta hoy obsoleto en la medida en que el proceso de globalización mundial y las tecnologías modernas han replanteado de forma radical la problemática de los recursos humanos en los procesos de producción.

El retroceso conjunto de la mortalidad y la natalidad, en base a los datos de la División de Población de la ONU, puede verse en el cuadro 2, con proyecciones hasta 2050. Se observa, igualmente, un repunte de la mortalidad alrededor de 1990, consecuencia del envejecimiento de la población. A partir del año 2000, según dicha fuente, el total de población comienza a disminuir en números absolutos en vista de que la tasa de mortalidad supera a la de natalidad, como muestra el gráfico 2, que ilustra el efecto de «tijera» o cruce de tasas.

Cabe señalar que también existen ciertas discrepancias entre los datos de proyección de la ONU y los del Instituto de Demografía del CSIC, que sitúan entre 2016-2020 (en lugar de 2000) el momento en que la TBM es superior a la de la TBN, produciendo un crecimiento negativo o caída de la población en términos absolutos.

El resultado de las proyecciones prolonga los niveles de esperanza de vida, que de 75 años para los varones y 81 para las mujeres, en 1995, pasaría a 80 y 85, respectivamente, en 2050. El gráfico 3 presenta la evolución desde 1950 a 2050, permitiendo comprobar que la brecha de los valores por sexo se mantendrá a corto y medio plazo, pero se reducirá ligeramente a largo plazo.

El gráfico 4 resume al horizonte 2026 el cambio rápido de la estructura de población de España. La disminución real de los menores de 20 años es consi-

CUADRO 2

Tasas brutas de natalidad y mortalidad, 1950-2050
(Por 1.000 habitantes)

<i>Año</i>	<i>TBN</i>	<i>TBM</i>
1950	20,3	10,2
1955	21,3	9,4
1960	21,5	8,8
1965	20,5	8,7
1970	19,5	8,3
1975	17,4	8,1
1980	13,3	7,7
1985	10,9	8,2
1990	9,7	9,0
1995	9,8	9,3
2000	9,4	10,0
2005	9,1	10,6
2010	8,4	11,0
2015	7,8	11,2
2020	7,6	11,7
2025	7,8	12,6
2030	8,0	13,5
2035	8,1	14,7
2040	8,2	16,1
2045	8,4	17,2
2050	8,4	17,2

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de *World Population Prospects: The 1994 Revision*, ONU, New York, 1995.

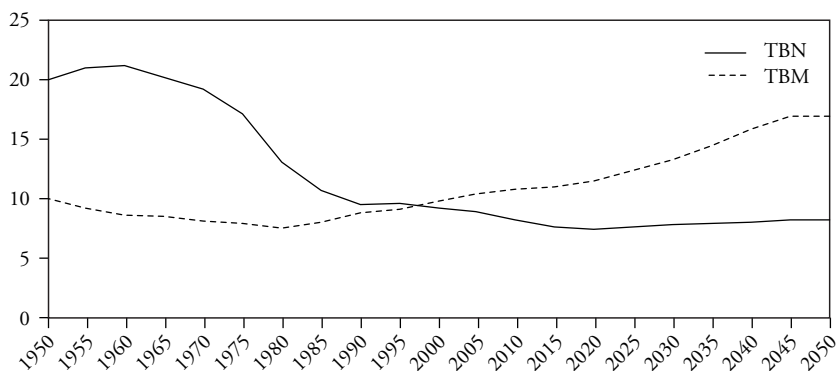
derable: cerca del 80 por 100 en 2026 del tamaño de 1991, mientras que el grupo en edad de actividad (20-59) se mantendrá prácticamente en las mismas dimensiones. Los mayores de 60 años, por el contrario, se incrementarán en 20 por 100 en 2011 y en 40 por 100 en 2026.

El efecto de «dependencia» de los mayores (ficción que supone que éstos están a cargo del grupo 20-59 pero utilizado corrientemente como indicador de «peso» demográfico) es elocuente, en cuanto evoluciona con relativa rapidez, según puede verse en el gráfico 6. Se observa que mientras al principio de los años setenta la «dependencia» era de 27 por 100, actualmente se sitúa alrededor del 40 por 100 y se proyecta en más del 55 por 100 para 2026.

Pero, quizá, el mensaje más importante de la Demografía a efectos de política social se refiere al cambio diferencial de la estructura de población de los mayores. El gráfico 7 nos muestra un incremento relativamente moderado del grupo 60-64 entre 1991 y 2026 (31 por 100), seguido por 40 por 100 en el grupo 65-74, 68 por 100 para el grupo 75-84 y 147 por 100 para el de 85 y más. Esta progresión es extremadamente importante en la medida en que la

GRAFICO 2

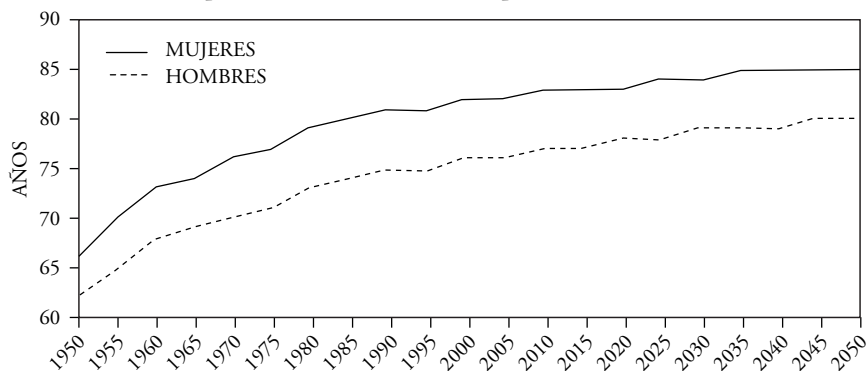
*Tasa bruta de natalidad y tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes.
España, 1950-2050*



FUENTE: Elaboración propia en base a datos de *World Population Prospects: The 1994 Revision*, ONU, New York, 1995.

GRAFICO 3

Esperanza de vida al nacer. España, 1950-2050



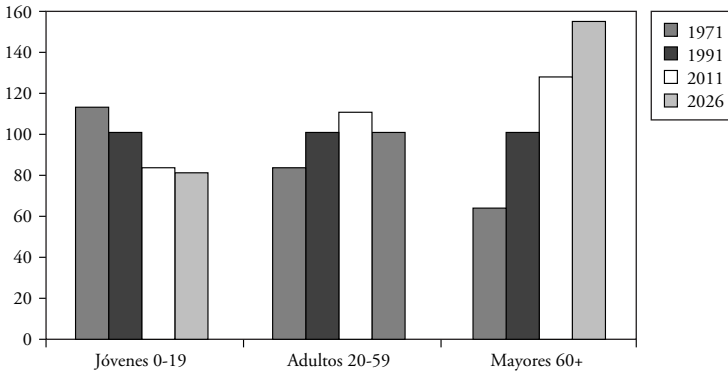
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de *World Population Prospects: The 1994 Revision*, ONU, New York, 1995.

política asistencial tendrá que adaptar las modalidades de acción a esta realidad probable: el grupo de mayores de 85 años en 2026 son los mayores de 55 años de hoy que sobrevivan en los próximos treinta años.

Para subrayar la incertidumbre, resumiremos en el cuadro 3 los resultados de cinco variantes de proyección para 2050 consideradas «solventes» y que nos ilustran de forma clara sobre la necesaria cautela en todo ejercicio prospectivo.

GRAFICO 4

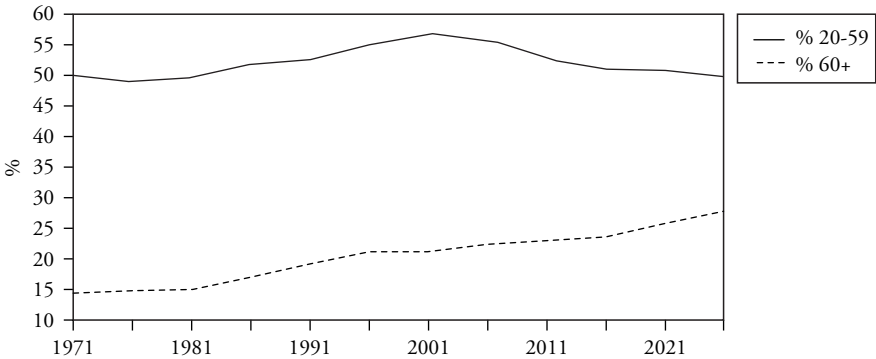
Evolución de la población española por grupos funcionales, 1971, 1991, 2011 y 2026 (1991=100)



FUENTE: Elaboración propia con datos de *Proyección de la población española, 1001-2026*, Instituto de Demografía, CSIC, Madrid, 1994.

GRAFICO 5

Evolución de la estructura por edades de la población española. Grupos de mayores de 60 años y adultos (25-59 años), 1971-2026

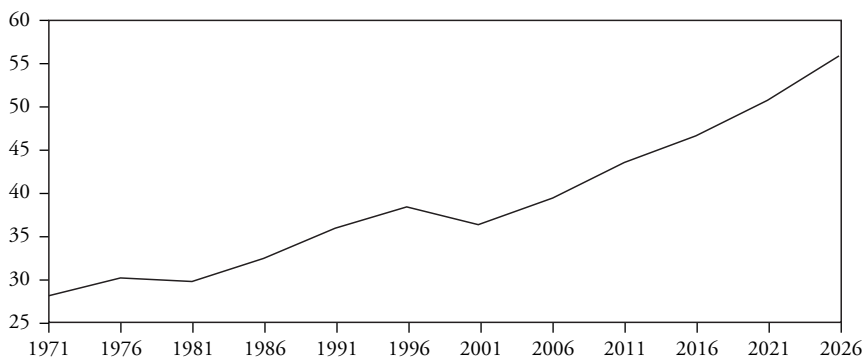


FUENTE: Elaboración propia con datos de *Proyección de la población española, 1001-2026*, Instituto de Demografía, CSIC, Madrid, 1994.

En resumen, la sociedad tendrá que asumir el hecho global de civilización que representa el envejecimiento probable previsto por la Demografía y formular un proyecto de política de ancianidad justo y equitativo, realista y ético.

GRAFICO 6

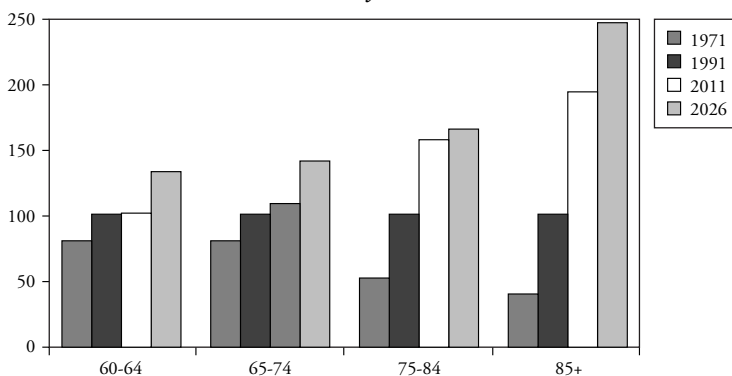
Tasa de «dependencia» demográfica de mayores (o relación de la proporción de personas de 60 años y más con la de 20-59 años), 1971-2026



FUENTE: Elaboración propia con datos de *Proyección de la población española, 1001-2026*, Instituto de Demografía, CSIC, Madrid, 1994.

GRAFICO 7

Evolución de la población de mayores en España por grupos de edades, 1971, 1991, 2011 y 2026 (1991=100)



FUENTE: Elaboración propia con datos de *Proyección de la población española, 1001-2026*, Instituto de Demografía, CSIC, Madrid, 1994.

CUADRO 3

Población española en 2050 según cinco variantes de proyección
(Miles de personas)

<i>Variantes</i>	<i>Total</i>	<i>% 65+</i>
Crecimiento mínimo	23.521	38,00
Media	35.422	30,19
Crecimiento máximo	41.478	29,43
Envejecimiento mínimo	37.432	23,88
Envejecimiento máximo	27.534	44,33

FUENTE: Elaboración propia del cuadro de J. A. Fernández Cordón (en *Pensiones y prestaciones por desempleo*, Fundación BBV, 1996).

2. ECONOMIA POLITICA DE LA VEJEZ Y SOCIOLOGIA DE LA ANCIANIDAD

El enfoque de la Economía positiva, basado en maximizar los beneficios y en minimizar los costos, modeliza el hecho generalizado de la disminución de la demanda de recursos humanos generada por el alza de productividad, sin precedentes, debida a la introducción masiva de la tecnología moderna. La resultante natural es la destrucción de puestos de empleo, el descenso de la edad de cese de actividad, mientras se aumenta, lenta pero inexorablemente, la duración de esperanza de vida de los mayores de 65 años. Bajo un tal prisma, el resultado del ciclo de vida de los individuos y de la regulación económica llevan a desequilibrios macroeconómicos bastante inquietantes pero dentro de la lógica del sistema.

En un trabajo reciente, el semanario británico *The Economist* (vol. 338, núm. 7950, 27-1 a 2-2-1996) recogía, bajo el título de «Economía del envejecimiento», una serie de ensayos basados en la lógica del mercado, enfatizando la imperiosa necesidad, en términos económicos, de prolongar la vida laboral con objeto de limitar las cargas públicas. Un argumento un tanto «generoso» se basa igualmente en el beneficio relativo que, en términos de aumentos de los derechos a pensiones, resulta de la prolongación de la vida activa. En un alarde prospectivo, uno de los ensayos «proyecta» las curvas de gastos e ingresos como porcentaje del PIB, hasta 2070, para Alemania, EE.UU., Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón. Los efectos son muy impresionantes, a menos de pensar que, como se indica más arriba, no sabemos nada de los componentes, ni de los gastos (número de beneficiarios, prestaciones medias), ni de los ingresos (contribuyentes, tasas). Sin hablar de los niveles del PIB en el futuro.

De hecho, el cuerpo doctrinal de la Teoría Económica carece casi totalmente de referentes sociales fuera de los Principios de la Hacienda Pública.

Algunos clásicos (Leftwich y Sharp, 1980) contemplan los programas de asistencia en un amplio cuadro que no se compromete excesivamente con lo que entendemos por Estado del Bienestar.

Y ello hace resaltar el carácter vertical de la Ciencia Económica, por oposición a la transversalidad de la Sociología, que en el terreno del envejecimiento toma en cuenta, más allá de los intereses individuales o colectivos, el telón de fondo de la cultura, de los valores y de principios no escritos pero suscritos indiscutiblemente por una amplia mayoría de la población en Europa, independientemente de sus orientaciones políticas, que llevan a la idea de pacto de sociedad.

De hecho, podemos afirmar que se trata de reconsiderar el modelo de integración social de la segunda posguerra mundial, cuyo carácter progresista define cotas de democracia difícilmente cuestionables (J. Subirats, 1996). Experiencias recientes (en Francia) demuestran la determinación de amplias capas de la población a defender parcelas de derechos adquiridos que puedan suponer una regresión respecto a las conquistas sociales.

En España, una encuesta realizada por la revista *Temas para el Debate* (marzo 1995), cerca de representantes del abanico político y sindical, muestra un gran consenso sobre el tema del futuro de las pensiones: prioridad al empleo y a la competitividad con vistas a superar la «crisis» y garantizar la solidaridad entre generaciones. La idea del reparto se halla muy arraigada, y las alternativas de planes y fondos de pensiones se contemplan como suplementos para quienes pueden permitirse los gastos correspondientes.

Los puntos que anteceden se ven plasmados en el informe conocido como «Pacto de Toledo», de febrero de 1995, que, sorprendentemente, no ha sido objeto del amplio debate que sin duda merece. Puntos discutibles, en opinión de algunos especialistas (J. Barea, M. Carpio y E. Domingo, 1995), serían la vía del incremento de las cotizaciones y el aumento de la aportación estatal a la Seguridad Social, en lugar de la reducción de gastos para lograr la suficiencia financiera del sistema. También son objeto de crítica ciertas recomendaciones del informe respecto al principio de proporcionalidad o equivalencia financiera (es decir, la de reducir las cotizaciones más en los trabajos de baja cualificación, o la de mezclar el principio de solidaridad redistributiva con los criterios propios de un sistema de pensiones contributivo, entre otras). Estiman dichos especialistas que el Pacto de Toledo es un pacto político, más que una propuesta coherente para resolver el problema.

Y es que, de hecho, repetimos, nos hallamos ante una problemática socio-política en la que se considera que todo es cuestión de prioridades. Queda, pues, claro que: 1) éste no es un problema estrictamente local y que supera nuestras fronteras, y 2) que la solución se debería encontrar a nivel de la UE, que actualmente investiga los medios de salir de este túnel.

En el plano conceptual, la Sociología de la Ancianidad tendrá que elaborar un cuerpo sólido de reflexiones y concreciones que, como veremos seguidamente, son objeto de amplio y profundo debate.

3. EL GRAN DEBATE: EL ENVEJECIMIENTO COMO «PLAGA» O COMO OPORTUNIDAD DE ENRIQUECIMIENTO COLECTIVO

La carga ideológica del tema que representa el envejecimiento es, en la práctica, la misma que la que, en su día, movilizó poderosos colectivos a favor o en contra del natalismo (J. Lecaillon, 1977, y J. Monreal, 1985), con signos opuestos según se tratara de los países ricos o los pobres. La polémica da lugar, naturalmente, a debates acerbos y sin concesiones, en los que las acusaciones mutuas van mucho más lejos de lo normalmente permisible y donde la pasión abre camino al conflicto.

En el fondo, el debate se resume a dos posiciones extremas: la de los que defienden a ultranza la imperiosa necesidad de promover el repunte sustancial de la fecundidad en los países avanzados para evitar el envejecimiento, que ellos juzgan una «catástrofe». Estos son calificados de «conservadores», en la medida en que preconizan un *statu quo* donde la pirámide demográfica clásica es una norma «ideal» cuya inversión provocaría los mayores desastres. Al otro extremo están aquellos que explican el proceso de envejecimiento de la población como una consecuencia lógica de las profundas mutaciones de los países industrializados, y no al revés.

El cambio radical de la tercera transición económica (tras la primera con la introducción de la máquina de vapor, la segunda con el paso de la producción artesanal a la industria de masas), representada por la mundialización que genera principalmente la informática, está en la base de la «crisis» profunda. Se trata de una revolución imparables cuyas consecuencias son imprevisibles y que, si bien debería conducir a un progreso masivo evidente, como las dos transiciones anteriores lo hicieron, es imposible prever actualmente su punto de estabilidad en el tiempo y aún menos su configuración social (N. Keyfitz, 1995).

La mitología moderna, incubada en los últimos cincuenta años (E. Morin, 1962), determina gran parte de los conceptos de base de los cambios acelerados que se producen ante nuestros ojos, cual una metamorfosis violenta, tanto en lo que respecta a los valores y las culturas como a las consecuencias directas en el cambio de las reglas del juego. La modernidad, con sus secuelas de consumo de masas y de nacionalismos, introduce una nueva lógica que tiende a anular la voluntad del individuo y del grupo al menospreciar su voluntad de ser actores directos en la gestión de sus vidas (A. Touraine, 1992).

Las concepciones que se enfrentan son antagónicas y en modo alguno objetivas, en la medida en que los principios en juego son de naturaleza política y trascienden la simple marcha de los acontecimientos. Por lo que respecta al envejecimiento y sus consecuencias, los argumentos por ambas partes son contundentes y pueden identificarse focos de debate más activos en determinadas áreas geográficas, primando el caso de los anglosajones y los franceses.

El ejemplo más reciente del debate por o contra el envejecimiento lo ilustra la revista *Population* (INED, París, nov.-dic. 1995), muy vehementemente,

al publicar el intercambio entre dos puntos de vista opuestos con réplica y contrarréplica por parte de dos especialistas de talla: el filósofo y sociólogo M. Loriaux, del Instituto de Demografía de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), que se declara «optimista» frente a la «revolución gris» que se avecina, por una parte; por la otra, el demógrafo J. Henripin, de la Universidad de Montreal, que recoge y sistematiza las consecuencias nefastas tanto en el plano financiero como en el laboral, considerando al mismo tiempo los «remedios» posibles (promoción de la natalidad e inmigración, concretamente, aunque descartando el peso real de la segunda), incluida la postergación de la edad de la jubilación.

Se opone, de hecho, una diferencia de paradigma interpretativo del envejecimiento. Quizá el argumento más impactante en todo el debate (y directamente relacionado con las profundas mutaciones que nos superan) es el hecho de que, en gran parte, la visión negativa del envejecimiento de nuestras poblaciones se debe al hecho que se sigue analizando las transformaciones sociales con una concepción simplista, lineal y mecanicista en una época en que deberíamos sustituirlas por enfoques evolucionistas, con sus complejidades y globalizaciones. Esto parece razonable e incluso urgente, cuando pensamos en la multidimensionalidad del mundo que nos rodea y nos sumerge.

Un ejemplo de lo que antecede se ilustra en que muchos demógrafos del envejecimiento siguen refiriéndose a las estructuras clásicas de población, en las que los grupos jóvenes son muy mayoritarios, como «ideales». Si bien es cierto que tales estructuras representan una generalización en la historia universal, no pueden ser un referente o norma ideal *per se*. Una estructura de población no es ni buena ni mala, ni favorable ni desfavorable, más que con relación a un tipo de sociedad. Es evidente que en una sociedad predominantemente rural, con demanda de trabajo intensivo que necesita mano de obra abundante y activa, el factor juventud es importante. Sin embargo, la misma estructura de población (lo estamos viviendo con dolor) resulta inadecuada en una sociedad industrial avanzada en la cual la cantidad global de trabajo disminuye al reemplazar la automatización y la robotización al hombre. En tales casos, el problema es la calidad y no la cantidad.

En resumen, las críticas formuladas por ciertos autores (A. Minc, 1987) en el sentido de que el resultado del envejecimiento es, sobre todo, el aumento de los gastos sanitarios, la reducción de la actividad económica y de la dinámica de las empresas, la caída de la creatividad, etc., parecen basadas exclusivamente en extrapolaciones a sistemas económicos y sociales inmutables y por la transposición al futuro de modelos de sociedades antiguas que, por lo esencial, ya son obsoletas.

Dos aspectos fundamentales emergen igualmente del debate: en primer lugar, la idea tradicional de que los «mayores» eran una carga se ve drásticamente modificada en la actualidad por colectivos con capacidad adquisitiva respetable, participación social (ocio, deportes, etc.) muy apreciable. Por otra parte, en el campo de los valores, en una época en que las referencias éticas no

sobran, la contribución de quienes construyeron el entorno en que vivimos dista de ser trivial.

El fondo del debate es, evidentemente, las modalidades de las pensiones: el sistema de repartición es defendido por quienes reclaman una solidaridad intergeneracional, mientras que sus oponentes se declaran favorables al sistema de capitalización. De la capacidad de nuestras sociedades para decidir digna y equitativamente las modalidades idóneas, sus combinaciones óptimas, dependerán las pautas de convivencia del futuro.

CONCLUSION

La polémica que nos ocupa seguirá, sin duda, generando debates que ayudarán a comprender mejor los postulados de esta problemática que se plasma en la necesidad de integrar sin discriminaciones a todos los ciudadanos sin distinción de sexo ni edad, teniendo en cuenta las transformaciones sociales que vivimos. En este contexto, el reconocimiento del envejecimiento de las poblaciones como factor de desarrollo para las sociedades avanzadas es fundamental.

El papel de la Sociología de la Ancianidad es de gran importancia a la hora de reconsiderar pautas de comportamiento (laboral, social) totalmente obsoletas en una era donde la experiencia, la competencia, la integridad, adquieren un peso específico irreemplazable. La continuidad de normas y regulaciones burocráticas, basadas en sociedades arcaicas, no puede más que generar tensiones y disfuncionamientos cuyas consecuencias son imprevisibles.

Queda cada vez más claro que el drama de nuestras sociedades en crisis, más allá del desempleo, es la incapacidad de distribuir los recursos colectivos bajo criterios diferentes del trabajo en su sentido tradicional. El siglo XXI tendrá que hacer uso de más imaginación para una mejor utilización de los recursos humanos disponibles, tomando como objetivo más el resultado del trabajo que los insumos visibles (tiempo, presencia). En este contexto, la calidad será el factor principal.

BIBLIOGRAFIA

- BAREA, J.; CARICO, M., y DOMINGO, E. (1995): *Papeles de Economía*.
- BARON, J., y HANNAN, M. (1994): «The impact of Economics on Contemporary Sociology», *Journal of Economic Literature*, vol. XXXII (sept. 1994).
- BAZO, M.^a T. (1990): *La sociedad anciana*, Centro de Investigaciones Sociológicas, Siglo XXI, Madrid.
- BENGOECHEA, J., y ERRASTI, J. M. (1994): «El futuro de las pensiones», *JCE*, núm. 736.
- CABRÉ, A. (1993): «Algunas consideraciones sobre el envejecimiento demográfico en España y su evolución futura», en P. Sánchez Vera (ed.), *Sociedad y población anciana*, S. P. Universidad de Murcia.
- CÁRCELES BREIS, G. (1994): «Tendencias sociodemográficas de la familia en España en el contexto europeo», *Rev. Trabajo Social Hoy*, núm. 4.
- CÁRCELES BREIS, G., y MONREAL, J. (1995): «Cambio social en España y políticas para los mayores en el contexto europeo», en *Las actividades económicas de las personas mayores*, SECOT y Central Hispano, Madrid.

- DE MIGUEL, A. (1987): «Los viejos en la sociedad actual», en *Sociedad y Sociología*, Ed. Salvat, Barcelona.
- FUNDACION BBV (1996): *Pensiones y prestaciones por desempleo*, Bilbao.
- HERCE, J. A., y PÉREZ-DÍAZ, V. (1996): *La reforma del sistema público de pensiones en España*, La Caixa.
- INSTITUTO DE DEMOGRAFÍA DEL CSIC(1994): *Proyecciones de la población española*, Madrid.
- JOUVENEL, H. de (1989): «Le vieillissement démographique en Europe», *Futuribles*, núms. 129-130, febrero-marzo.
- KEYFITZ, N. (1995): «Le remplacement des générations dans une période de transition», *Population*, núm. 6.
- LE BRAS, H. (1991): *Marianne et les lapins*, Olivier Orban, París.
- LECAILLON, J. D. (1977): *L'économie de la sous-population*, PUF, París.
- LEFTWICH, R., y SHARP, A. (1980): *Economics of Social Issues*, Business Pubs. Inc., Dallas (Texas).
- MEADOWS, D. (1972): *The Limits to Growth*, Universe Books, New York.
- MINC, A. (1987): *La machine égalitaire*, Grasset, París.
- MONREAL, J. (ed.) (1985): *Población y Economía*, Universidad de Murcia.
- MORIN, E. (1962): *L'esprit du temps*, Grasse, París.
- OECD (1996): *Estudios económicos de la OECD, España 1996*, París.
- ONU (1977): *World population prospects*, New York.
- PETTERSEN, W. (1965): *The Politics of Population*, Doubleday & Co., New York.
- ROCARD, M. (1996): «Solución para crear empleo...», *El País*, 22-4.
- SÁNCHEZ VERA, P. (ed.) (1993): *Sociedad y población anciana*, Universidad de Murcia.
- SUBIRATS HUMET, J. (1996): «Cambio y continuidad en las políticas sociales del Estado de Bienestar», en *Avances en política social*, Diputación Provincial de Granada.
- TINBERGEN, J. (1963): *Econometric models of Education*, OECD, París.
- TOURAINÉ, A. (1992): *Critique de la Modernité*, Fayard, París.
- ZABALZA, A. (1994): *El País*, 15 de agosto.

RESUMEN

El artículo, tras resumir la problemática actual en su vertiente demosocial, considerando los últimos trabajos prospectivos sobre envejecimiento, relaciona las corrientes actuales sobre Economía Política de la Vejez y Sociología de la Ancianidad y reseña la polémica en curso sobre el sentido y las consecuencias previsibles del envejecimiento de la población en los países industrializados, tanto en el plano económico como en el social y humano. Subraya la opinión de que el proceso de envejecimiento de la población es una consecuencia lógica de las mutaciones profundas de los países industrializados, y no al revés.

Por último, propugnando la sustitución de los enfoques simplistas y mecanicistas por juicios más racionales basados en la realidad evolucionista de nuestro tiempo, enfatiza el papel de la Sociología de la Vejez, como instrumento de análisis del proceso de envejecimiento, desde una perspectiva realista y constructiva.

ABSTRACT

The article reviews the current approaches to Ageing from a socio-demographic perspective, on the light of the latest studies and reports in this field. It compares the prevailing trends on Economics of Ageing and Sociology of Old Age and sums up the ongoing debate in the industrialised countries from economic, social and human standpoints. The article underscores the view that the Ageing process is a logic outcome from the deep ongoing changes in those countries and not the opposite.

Finally, it proposes the replacement of simplistic and mechanist arguments by more rational outlooks, based upon our present evolving times and underlines the role of the Sociology of Old Age as an analytical instrument of the Ageing process, from a realistic and constructive standpoint.